

Agenda ciudadana

Entre la espada y una caravana

Tras recorrer 700 km, una caravana -hombres, mujeres y niños- que partió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre, llegó a la frontera sur de México y forzó su entrada a nuestro país y se mostró dispuesta a caminar otros 3 mil km hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, a donde buscarán ingresar como asilados o indocumentados que huyen del crimen y de la pobreza. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ya les advirtió que ni lo piensen, que los considere una amenaza a la seguridad norteamericana y les impedirá la entrada.

De haber ocurrido una situación similar entre 1822 y junio de 1823, se le hubiera tratado como migración interna, pues tanto Centroamérica como el sur norteamericano eran parte de la recién nacida nación mexicana. Pero hoy es un problema internacional y social profundo que involucra a Estados Unidos y a países latinoamericanos situados en la zona periférica de la gran potencia. Desde hace un siglo, la migración del sur pobre al norte rico en nuestra región, ha dado lugar a problemas diplomáticos, políticos, económicos, sociales y culturales serios. Y la situación se ha complicado aún más desde que a Estados Unidos lo encabeza un “na-

cionalista blanco” (white nationalist), xenófobo y racista, que considera la existencia misma de comunidades latinoamericanas en su país, especialmente si son indocumentados, como una amenaza a su seguridad y, posiblemente, a su esencia como sociedad blanca.

De acuerdo con el Pew Research Center de Washington, en 2016 en Estados Unidos vivían 44.7 millones de personas de origen extranjero: 13.5% de la población. Se trata de un porcentaje alto si se le compara con el 4.7% de 1970, pero no tanto si el punto de comparación es el 14.8% en 1890. De ese total, se calcula que 76% tienen su estancia legalizada, pero 11 millones no, y es sobre ellos que se ha volcado la furia “justa” del “nacionalismo blanco”.

Estados Unidos es una nación de migrantes, pero en el pasado la mayoría provenían de Europa. Ya no es el caso. Del total de su población nacida fuera, 26% es de origen mexicano y otro 25% de América Latina y El Caribe. Apenas el 13% provienen de Canadá y Europa. Esto ha creado una situación políticamente muy explotable para quienes, como Trump, alimentan una base política susceptible a las ideas y valores del “nacionalismo blanco”.

Los medios que hoy si-

Los medios que hoy siguen a la caravana de centroamericanos, reportan que está integrada por pobres muy decididos a correr riesgos y padecer penurias con tal de escapar a un contexto de gran violencia y ausencia de oportunidades. Y si marchan como multitud, es para protegerse de la brutalidad del crimen organizado en México. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el evento tenga lugar cuando la estación no es la más propicia para una caminata a cielo abierto, pero si la más oportuna para que las imágenes difundidas por la televisión puedan servir a Trump para presentar a esa multitud como una horda bárbara que amenaza a Estados Unidos. Y que él, Trump, se presenta como el salvador de su país, justo en vísperas de elecciones legislativas que pueden reforzar o debilitar su poder.

guyen a la caravana de centroamericanos, reportan que está integrada por pobres muy decididos a correr riesgos y padecer penurias con tal de escapar a un contexto de gran violencia y ausencia de oportunidades. Y si marchan como multitud, es para protegerse de la brutalidad del crimen organizado en México. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el evento tenga lu-

gar cuando la estación no es la más propicia para una caminata a cielo abierto, pero si la más oportuna para que las imágenes difundidas por la televisión puedan servir a Trump para presentar a esa multitud como una horda bárbara que amenaza a Estados Unidos. Y que él, Trump, se presenta como el salvador de su país, justo en vísperas de elecciones legislativas que pueden reforzar

o debilitar su poder. De acuerdo con The New York Times, (24/10/18), la idea inicial de la caravana proviene de la izquierda hondureña para exponer la incapacidad del gobierno de derecha Juan Orlando Hernández, pero al final le vino como anillo al dedo a Trump. ¡Tiene suerte!

Independientemente de su origen, es claro que la caravana ha colocado a México entre la espada trumpiana y una marea migrante que se niega a ser detenida por fronteras y burocracias. ¿Qué hacer ante un problema que no tiene una solución clara? Pues administrarlo de tal manera que no deje una marca negativa en nuestra relación con Estados Unidos y o con los vecinos del sur.

En un twitter Trump echó en cara a México que no detuvieron en su frontera sur a los migrantes que forzaron su entrada. Y es que, desde su posición, simplemente no le conviene reconocer que exigió públicamente a Peña Nieto usar la fuerza contra los migrantes vecinos, es, políticamente, mucho pedir. Tampoco le convenía reconocer ahora que, en la práctica, México ya funciona como una primera y gran barrera de contención de los migrantes centroamericanos, pues de 2015 a la fecha, nuestras autoridades

han detenido y deportado a más nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador, que los propios Estados Unidos: 436, 125 frente a 293, 813, (El Universal, 21/10/18).

En esta coyuntura, el gobierno y la sociedad mexicana tenemos la oportunidad y obligación de actuar en relación con la inesperada caravana de centroamericanos, sin miedo a las amenazas de Washington y sí, como quisiéramos que los norteamericanos actuaran frente a los migrantes mexicanos sin documentos, que cruzan hacia Estados Unidos impulsados por las mismas razones y esperanzas que los vecinos caminantes del sur.

Hay en México quienes piden, como Trump y los suyos, sellar nuestra frontera sur e impedir la entrada a quienes “vienen a quitar empleos” y cosas peores. Es de desear que, finalmente, se impongan, como respuesta memorable, no la xenofobia ni el clasismo, sino la solidaridad, de la que ya han dado muestra quienes les han dado ayuda en el camino. Sería una bofetada con guante blanco a la brutalidad del trumpismo, y de la que podríamos sentirnos orgullosos.

www.lorenzomeyer.com.mx
agenda_ciudadana@hotmail.com

Jesús Cantú

Luis Rubio

Construir para repartir

Uno de los mayores problemas de la administración pública es la construcción de “elefantes blancos”, obras públicas normalmente muy vistosas y –desde luego– costosas, cuyos resultados son nulos o muy pobres, sin embargo, sí permiten a los gobernantes presumirlos desde el mismo momento en que anuncian su construcción y cuando los inauguran; por supuesto, esto sin considerar la posibilidad de desvío de recursos que implican.

El pasado viernes, de acuerdo a una información publicada por el periódico regiomontano El Norte en su edición del sábado 17 de octubre, en el foro estatal de salud celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Carlos Emilio Jaques Rivera, coordinador de los Foros de Salud del Senado, señaló que a nivel nacional, se construyen “al menos 600 hospitales públicos... [que] no cuentan con infraestructura, mobiliario y personal médico para operar”.

Unos meses antes, la organización de la sociedad civil mexicana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, difundió los resultados de una investigación que desarrollo sobre el desempeño de los Hospitales de Alta Especialidad, construidos bajo la figura de las Asociaciones Público-Privadas, conocidas como APP's, que demostraba la subutilización de la infraestructura.

Textualmente el documento ejecutivo de dicha investigación señala en uno de sus párrafos: “En promedio, la ocupación promedio de los hospitales no alcanza el 50%. Sin embargo, la SS reporta sus resultados con base en sus camas habilitadas, que en la mayoría de los casos no coinciden con su capacidad instalada. Así los hospitales no alcanzan la actividad que fue planificada en los documentos que justificaron su construcción. Por ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) Ixtapaluca hizo 91,444 consultas en 2017 de las 320,112 consultas anuales previstas en sus documentos de planificación. Por su parte, Ciudad Victo-

ria realizó 24,156 consultas en 106, de las 142,000 que tenía previsto realizar. Lamentablemente, la mayoría de hospitales negaron, vía INAI, tener la información de los documentos de planificación y sólo contamos con los datos reflejados en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En cualquier caso los hallazgos recabados de estas fuentes y los testimonios de los informantes clave son suficientes para confirmar la subutilización de la infraestructura”.

Continúa: “La baja productividad es también evidente en los equipos de alta especialidad. En promedio, se realizan 1.3 mastografías diarias, 10 tomografías y 4.5 resonancias. El PET SCAN del Bajío hace 1 estudio diario en comparación con 13 y 15 diarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) respectivamente. El equipo de cirugía robótica Da Vinci del HRAE Zumpango trabaja a un 8% de su capacidad. Por poner un último ejemplo, el HRAE Ixtapaluca tiene cerrados 9 quirófanos de un total de 14.”

En el foro se denunció la construcción de hospitales que no pueden utilizarse porque se concluyó su construcción física, pero no cuentan con los recursos materiales y humanos para poder equiparlos y ponerlos en operación, esto significa un gran desperdicio de recursos públicos, en un país en el que existen 30 millones de mexicanos que carecen de seguridad social y cuya única posibilidad de acceder a servicios de salud es precisamente a través de estas instituciones. Pero más allá de ese desperdicio, esos edificios sin utilizar están deteriorándose y el día que se pretendan utilizar requerirán nuevamente de importantes inversiones.

En el otro estudio, lo que se pone de manifiesto es la gran paradoja: en un país donde millones de mexicanos se quedan sin acceder a servicios médicos especializados por carencia de recursos o protección de una institución de salud, los HRAEs

se utilizan a menos de la mitad de su capacidad.

La realidad que se evidencia en el sector salud, lamentablemente es la regla y no la excepción en México. Los “elefantes blancos” decoran el territorio nacional, ya sea en proceso de construcción; terminados, pero sin el equipamiento necesario para funcionar; terminados y con el equipamiento, pero sin el indispensable personal capacitado para operar; o terminados, equipados y con personal, pero con una bajísima utilización.

Lo importante para muchos de los gobernantes mexicanos no es atender las necesidades de la población, sino utilizar estas obras faraónicas para sus fines personales: enriquecimiento ilícito, promoción de su imagen personal, proyectarse para posiciones de mayor responsabilidad y presupuesto y/o cumplimiento de sus promesas de campaña, entre los más destacados.

A pesar de que la misma Constitución establece la obligación de realizar un proceso de planeación democrático, con el presunto objetivo de garantizar que el presupuesto público se dedica a la atención de las necesidades más imperiosas de la población mexicana, lo cierto es que lo que ha prevalecido es la simulación y, por ende, la definición arbitraria y discrecional de las prioridades, pensando siempre en los beneficios personales y no en la solución de los problemas nacionales.

Muchos de los problemas que hoy enfrenta México no requieren de obra pública, sino de un mejor aprovechamiento de lo ya existente; los nuevos gobernantes deben entender que su gestión no necesariamente se juzgará en función de las obras materiales que realizaron, sino por su capacidad para incrementar el bienestar de la población, particularmente de aquellos que hoy carecen de los más elementales. Urge dejar atrás la era de las obras faraónicas e iniciar la de los estadistas, que sin necesidad de obras físicas logran dejar su huella en la historia nacional.

El anverso de la moneda

Todas las crisis que los mexicanos hemos experimentado han sido el resultado de un presidente que dejó de hacer su trabajo o que lo hizo mal. Ese es el costo de un sistema centrado en torno a un solo individuo: sus humores, capacidades, aciertos y errores determinan el resultado para 120 millones de mexicanos.

El sistema político emanado de la Revolución constituyó la institucionalización del sistema porfiriano: en lugar de un dictador eterno, los presidentes serían monarcas sin posibilidad de heredar su puesto, en las palabras de Cosío Villegas, pero monarcas al fin. Ese régimen le confería facultades metaconstitucionales a quien ocupara la presidencia, mismas que servían para ejercer el poder público de manera discrecional, tomar decisiones arbitrarias y asegurar la permanencia del statu quo a través de lealtades y clientelas nutridas por la corrupción. El presidente en el centro del poder, disponiendo de los recursos públicos y de las llamadas “instituciones” para sus propios fines.

El gran beneficio de ese sistema fue la destreza con que se podían lograr cambios cuando esto era necesario, en tanto que el gran costo y riesgo radica en la inexistencia de contrapesos que impidieran costosos errores. Este sistema llevó a profundas crisis cambiarias en 1976, 1982 y 1994-1995, todas ellas atribuibles a errores evidentes de quien ocupaba la presidencia, pero también facilitó una rápida recuperación en el año siguiente bajo una nueva administración. De la misma forma, mientras que los países debidamente institucionalizados pueden tomar años para atacar problemas nodales de sus economías (como ocurre con los europeos), en México esas reformas se adoptaban casi sin chistar.

El punto es que el desarrollo y la civilización tienen costos, pero el benefi-

cio reside en que la ciudadanía de esas naciones no está sujeta a los humores, estilos y capacidades de quien preside la función gubernamental. Uno puede argumentar que la posibilidad de emprender urgentes reformas compensa los riesgos de un mal gobierno, pero lo que sería deseable es que no hubiera malos gobiernos o que su capacidad para tomar malas decisiones fuese limitada por instituciones fuertes e independientes.

En el contexto político es común escuchar expresiones relativas a la fortaleza de las instituciones: se le atribuyen poderes fundamentales para limitar el ejercicio del poder presidencial. Sin embargo, la evidencia no justifica esas pretensiones. Uno puede observar cómo han sido cambiadas las instituciones, o los responsables de las mismas, cada que los poderes fácticos, comenzando por el presidencial, deciden que no están satisfechos con su desempeño: así ha ocurrido con el instituto electoral y con las comisiones de competencia y telecomunicaciones. Desde esa óptica, no hay razón para pensar que, en un contexto de presión, lo mismo ocurriría con otras como la Suprema Corte o el Banco de México. Del Congreso y del Senado no es necesario hablar: el dedo lo hace.

Nuestro régimen político es unipersonal y eso implica facultades efectivas por encima de las instituciones: un presidente con poderes extraordinarios que, en estos días, sólo está limitado por las capacidades personales de quien lo va a ostentar y por los mercados financieros internacionales que muy pocos en el mundo se atreven a desafiar.

Un sistema presidencial unipersonal tiene virtudes, pero todas dependen de las capacidades e integridad del presidente. Los gobiernos que así operan dependen de la seriedad y carácter del presidente. Si el presidente yerra o deja de hacer su trabajo, el

país paga las consecuencias. Si el presidente utiliza los recursos públicos para apostar el futuro del país, son los ciudadanos quienes se beneficiarán o padecerán los costos. Cuando Enrique Peña Nieto se durmió después de Ayotzinapa, el país se congeló haciendo posible el advenimiento de un mesías. Nada es gratis.

A los mexicanos nos encanta saltarnos las trancas, dar vuelta donde está prohibido o estacionarnos en segunda fila. Nos parece que es impropio, equivocado o injusto que alguien más haga lo mismo, pero todos creemos que tenemos el derecho divino de hacerlo nosotros. Esa manera de ser es un fiel reflejo del sistema político, donde el presidente tiene poderes reales para comportarse igual, en los ámbitos de competencia de su función. Si queremos que la presidencia se atenga a reglas y a mecanismos de contrapeso, también los ciudadanos tendríamos que cambiar nuestra forma de ser.

Cada seis años el país vive un momento de trance por el peligro inherente a que un loco, un destructor o una persona que postula un cambio radical llegue a la presidencia. Sin embargo, en lugar de enfocarnos al problema de fondo -las facultades excesivas de la presidencia- todas las luces se enfocan a los supuestos o reales defectos y atributos de esa persona. Nuestro problema no es que tal o cual individuo sea bueno y merecedor de la oportunidad de ser presidente, sino que no existan límites efectivos en caso de que resulte que esa persona no era tan merecedora. Aunque AMLO no lo reconozca, al país, y a él mismo, le urge un nuevo régimen sustentado en pesos y contrapesos efectivos.

@lrubiof

ÁTICO:

La presidencia mexicana tiene facultades excesivas, lo que facilita cambios eficaces, pero hace depender todo de una persona.